

La construcción del saber académico en América Latina: ¿Voz de los excluidos o sostén de la tecnocracia?¹

Diana Tussie

PhD Relaciones Internacionales, LSE.

FLACSO Argentina,

Ayacucho 555, Bs As, Argentina.

Tel. 54-11-5238-9300

dtussie@flacso.org.ar

Melisa Deciancio

Maestrando en Relaciones y Negociaciones Internacionales,

FLACSO Argentina.

FLACSO Argentina,

Ayacucho 555, Bs As, Argentina.

Tel. 54-11-5238-9300

mdeciancio@flacso.org.ar

¹ Agradecemos a Mercedes Botto sus constantes reflexiones, la oportunidad para largas discusiones sobre el tema y especialmente sus seminarios pioneros sobre el tema en FLACSO, Argentina

INTRODUCCIÓN

Pensar América Latina de una nueva manera, o repensarla, supone reflexionar sobre el camino recorrido a la vez que pone en cuestión diversas formas de relación entre las ciencias sociales (y sus actores, los académicos) tanto con su objeto de estudio como con su contexto político. Así, pensar las ciencias sociales latinoamericanas invita a pensar en la historia misma de la región y sus marchas y contramarchas. Sería imposible imaginar la constitución del saber social en la región independientemente del contexto histórico en el que ha producido su conocimiento, desarrollado sus investigaciones, elaborado sus teorías y abordado sus conclusiones. La producción del conocimiento social en la región ha sido extensa -con ciertas disparidades entre algunos países respecto de otros- conduciendo a la conformación de una comunidad académica que ha logrado dar cuenta de los dilemas de la región. Dado que la producción de conocimiento social no se encuentra aislada de los procesos políticos, sociales y económicos en la cual se desarrolla, siempre existe una frontera borrosa entre ésta y el proceso de toma de decisiones a nivel político.

En 1996, FLACSO junto con la UAM-Xochimilco organizó el seminario “*Los intelectuales y los dilemas políticos en el siglo XX*” y posteriormente, a lo largo de tres meses, se analizó la vida y obra de grandes intelectuales y su relación con la vida política. En el libro que se publicó como resultado de dicho seminario, Norbert Lechner abrió el fuego con una aguda observación:

“En América Latina tenemos poca tradición en dar cuenta de nuestro quehacer, pasamos de tema en tema, de coyuntura en coyuntura, sin hacer memoria. Nos cuesta asumir nuestra responsabilidad, es decir, responder a alguien (el público, los conciudadanos) por algo (la actividad intelectual). Una de las razones que inhibe ese benéfico ejercicio de autorreflexión en nuestros países radica en la tradición cortesana; quiero decir, una atención desmesurada a la relación de intelectuales y poder. Se tiende a evaluar (autoevaluar) la labor intelectual en función de su influencia en las decisiones políticas, sea como consejero tras el trono, sea como portavoz de los marginados. Ello produce -más allá de la saludable polémica- una partidización de consecuencias nefastas. La partidización del debate intelectual me parece deplorable, porque debilita aun más la de por sí ya frágil esfera pública en nuestros países. En lugar de fortalecer lo *público* como ámbito autónomo y crítico, tanto de la esfera estatal como del mundo privado, la discusión ciudadana termina identificada con la (por lo demás necesaria y muy legítima) lucha de los partidos políticos.” (Lechner, 1997, pág. 33)

Tres años más tarde, en 1999, la UNESCO y el Consejo Internacional para la ciencia convocaron al Congreso Mundial sobre la Ciencia en Budapest. Allí, 150 naciones se reunieron por primera vez para hablar sobre la ciencia y su papel en el mundo actual consensuando como corolario un nuevo contrato social en este ámbito: la renegociación de las relaciones entre ciencia y sociedad que resultó en la aprobación de la *Declaración sobre la ciencia y el uso de conocimiento científico*. Vale destacar también al programa MOST

(*Management of Social Transformations Programme*) de la misma organización fundado en 1994 con el fin de mejorar la influencia de la investigación social sobre el planteamiento de políticas públicas y la toma de decisiones en los diversos niveles políticos y sociales (Nájera Meixueiro, 2003).

A partir de dichas iniciativas, -sumado al papel clave de UNESCO junto con su permanente interacción en nuestra región con la FLACSO- se inicio una creciente sensibilización y un mayor activismo social sobre los problemas relacionados con las políticas públicas, ocupando hoy día un lugar importante en la agenda académica. Sin pretensiones de realizar una historia conceptual rigurosa, la pregunta que nos planteamos en este ensayo se centra principalmente en como han ido cambiado las estrategias de autoposicionamiento de los académicos, cuánto se ha recorrido desde entonces y cómo ha cambiado la forma de relación entre los académicos y la política pública en el acelerado proceso de diferenciación que se ha dado en los últimos lustros. Asimismo, se abordará cómo ha ido cambiando la eterna pregunta acerca del valor del conocimiento así como su incidencia ¿Cómo se está re-pensado a sí misma la región en relación con la política pública?

Los debates en cuanto al rol del investigador social y su relación con la elaboración de políticas es arduo. Por un lado, se encuentran quienes consideran que la tarea del científico social debería orientarse plenamente hacia las políticas públicas –ser *policy oriented*, mientras por otro lado, se encuentran quienes abogan por mantener la tarea del investigador dentro de los claustros universitarios, concentrados en la observación y elaboración teórica, y aislados de la formación de política pública. Frente a esta disyuntiva aparentemente sin resolución -o cuando si lo fuera, es solo a título personal- el análisis acerca del rol del investigador social no pretende discernir entre cuál sería el comportamiento adecuado de éste sino cuál ha sido históricamente su desempeño en la región en consonancia con el contexto económico, político y social en el cuál ha llevado adelante sus funciones.

Este proceso evolutivo del rol del intelectual- académico en la vida política de la región no ha variado considerablemente de un país a otro a lo largo de su historia. Es en este sentido que se propone elaborar un análisis de la evolución del pensamiento social latinoamericano a lo largo de su historia y su relación con la toma de decisiones a nivel político en la región. Pensar la región como un todo permitirá identificar las tendencias existentes en la construcción del conocimiento en América Latina y las similitudes de su incidencia en el ámbito público. Para ello se delinearán, en primer lugar, una primera aproximación a la evolución de las ciencias sociales y la relación resultante entre el trabajo académico y la toma de decisiones. En una segunda sección, el foco estará puesto en el surgimiento del saber experto y el surgimiento de los llamados *think tanks* acompañando la restructuración política y económica de los países latinoamericanos. En tercer lugar, se profundizará sobre los diversos enfoques sobre el dilema del mundo académico relativo al saber experto y el

intelectual. Por último, se presentarán los nuevos desafíos que emergen al repensar América Latina en el contexto actual.

TRAZANDO UN CAMINO: LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y LA POLÍTICA PÚBLICA.

La idea de producir conocimiento social con el fin de lograr un progreso social fue tomando forma durante la Ilustración. En muchos aspectos, las revoluciones en Francia y América se constituyeron como la culminación de ese desarrollo y la primera “aplicación” a gran escala de la teoría social y política modernas. América se constituyó como la primera identidad de la modernidad donde la república moderna se podía construir en tierra virgen sin el bagaje de la aristocracia ni de la monarquía. Mientras tanto, las revoluciones fueron interpretadas como las responsables de haber introducido una situación social en la cual un conocimiento social adecuado (y no ligado a la tarea de salvar almas) permitiría el gradual pero incesante progreso de la vida social. Así, las formas de pensar las ciencias sociales fueron también creadas en este contexto.

Hacia fines del siglo XVIII, en un proceso de separación del control teológico del conocimiento, pero heredando la tradición espiritual de la iglesia, se erige el concepto de libertad como el principal ordenador del mundo social y político bajo la idea de que no era necesario ningún tipo de control sobre la sociedad ya que ésta se autorregularía apoyada en el precepto de la libre expresión de la voluntad de sus individuos. Críticos de estas ideas como Burke, Hegel y Marx comenzaron a delinear sus ideas convencidos de la necesidad de una nueva forma de regulación que contemplara la voluntad de los individuos que conformaban el espectro de clases sociales. Su principal preocupación se enmarcaba en un intento por elaborar un conocimiento útil que permitiera predecir las acciones de los individuos y sus resultados y lograr así la preservación del orden social.

El resultado de esta búsqueda se evidenció con la emergencia de las cuatro formas de razonamiento principales que han caracterizado a las ciencias sociales a lo largo de sus dos siglos de existencia: el culturalismo, la sociología, el racionalismo y la estadística. Todas ellas han sido desarrolladas no como proyectos puramente intelectuales sino con una visión que permitiera identificar y mejorar aquellos elementos de la vida social que pudieran proveer de estabilidad al mundo social. Fue así como se conformaron como la base intelectual para el surgimiento de algunas de las disciplinas claves de las ciencias sociales –la antropología, la sociología, la economía y la estadística- durante el período de consolidación interna de las universidades.

De la mano de las nuevas disciplinas y enfoques teóricos dentro de las ciencias sociales se fue desarrollando el interés por los estudios empíricos, los cuales se encontraban directamente asociados al avance de la industrialización y los nuevos conglomerados urbanos que surgieron como resultado de ella. El impulso hacia la búsqueda de nuevos conocimientos provino de grupos sociales y políticos modernizadores que apoyaban la industrialización pero que abogaban por reformas sociales más amplias. Estos grupos gradualmente llegaron a abrazar la noción de que la acción política para abordar “la cuestión social” debería basarse

en un análisis empírico, extensivo y sistemático de los problemas sociales subyacentes. De este modo, hacia principios del siglo XX ya se encontraban disponibles un conjunto de formas de teorización de la sociedad, estrategias de investigación empírica y formas organizacionales para la producción del conocimiento social –como profesiones y universidades estatales- (Wagner, 2007).

A partir de la evolución, consolidación y profesionalización de las ciencias sociales, los científicos sociales han ido adoptando diversos roles y desempeñando una gran variedad de tareas. La producción del conocimiento avanzó hasta el punto en que prácticamente hubo un distanciamiento entre la ciencia y la sociedad, ya que los mayores esfuerzos en investigación se concentraron en campos un tanto alejados de los problemas sociales cotidianos. Poco a poco se fue abriendo la brecha entre la generación de nuevos conocimientos y su aplicación en la sociedad para el desarrollo, o la incorporación de soluciones a problemas sociales generadas desde la academia a las políticas públicas (Nájera Meixueiro, 2003). Una de las principales divisiones que se han producido respecto del rol de la investigación social y el rol de los académicos se encuentra asociada a la pregunta acerca de su incidencia y participación en la toma de decisiones a nivel político. Como consejeros del príncipe, ha sido una constante del mundo académico pensar que el conocimiento comienza con sus propuestas, y que el conocimiento académico es superior al conocimiento práctico.

En el caso de América Latina, el continente ha sufrido gran cantidad de cambios a lo largo de su evolución, los cuales han marcado el desarrollo de los estudios sociales otorgándoles sus características propias y alterando su curso. La heterogeneidad que caracteriza a las ciencias sociales latinoamericanas proviene de la mezcla de elementos arcaicos con otros que llamaríamos modernos, lo que marca un panorama muy diversificado entre las sociedades del continente y en el interior de ellas mismas (Portantiero, 1989). Dentro de la variedad de enfoques y disciplinas que las comprenden, los estudios que analizan el papel del conocimiento en la toma de decisiones resultan novedosos. Como señala Botto, en su mayoría se trata de estudios de casos nacionales que buscan explicar el por qué del protagonismo de estos actores en la puesta en marcha de las reformas estructurales de los años 90. La amplia literatura y evidencia existente acerca del vínculo entre la investigación y la toma de decisiones políticas se concentra en la experiencia de los países industrializados, especialmente los pertenecientes a la OCDE; mientras es prácticamente inexistente en los países en desarrollo. La explicación de ello se encuentra no solo en la amplia diversidad cultural, económica y política entre los distintos contextos, sino en el papel fundamental que los actores internacionales ejercen tanto en el curso de la investigación como en los procesos políticos (Botto, 2007). Las estrategias de autopoiesis de los intelectuales-académicos se han ido redefiniendo con el tiempo en una búsqueda por dar respuesta y significación a los procesos de transformación que fueron atravesando las sociedades a escala mundial. Y se da nueva vida al eterno debate de las ciencias sociales en torno a la tensión estructura-agencia. Así en su versión primigenia, y aún muy vigente en el imaginario,

se encuentra la figura del «gran intelectual», nacida en el siglo XIX y prolongada en el siglo XX.

Hacia mediados del siglo XIX, las ciencias sociales comenzaron a aflorar de la mano de intelectuales pertenecientes a la elite gobernante que llevó a la independencia a los países latinoamericanos. El comercio con Europa sirvió no solo para la exportación e importación de bienes sino también para la importación de ideas. Como señala Altamirano (2004), “los modos de descripción e interpretación del mundo social que llamamos sociológicos no fueron el producto de una reflexión endógena, y no podría hablarse del surgimiento, sino más bien del ingreso, la adopción y, eventualmente, la adaptación de esas formas todavía nuevas de discurso sobre la vida social” (Altamirano, 2004, pág. 33) La elite gobernante latinoamericana se formaría en base a su afán de tratar de asemejarse a Europa, sin preocupación por la producción de conocimiento autóctono. Así, “la estatura de nuestros pensadores se medía por su erudición respecto a las corrientes europeas de pensamiento y a la elegancia con que aplicaban las ideas importadas a nuestra realidad” (Marini). Estos primeros expositores de las ciencias sociales combinaban sus actividades intelectuales con carreras profesionales como políticos, legisladores o magistrados, mostrando la relación directa existente entre su rol como intelectuales y su involucramiento directo en la vida política. Al mismo tiempo, la construcción de las nuevas repúblicas de América fue tema privilegiado en las preocupaciones de las ciencias sociales del siglo XIX y principios del XX.

Así, la sociedad imaginada con perspectiva eurocéntrica como característica y condición de los emergentes Estados-nación se constituyó como la piedra fundacional de buena parte del pensamiento social. Sin embargo, la construcción real no fue llevada a cabo por medio de la descolonización de las relaciones sociales y políticas entre los diversos componentes de la población, sino por la eliminación masiva de algunos de ellos (indios, negros y mestizos). Dadas esas condiciones originales, la democracia alcanzada y el Estado-nación constituido, no podían ser ni afirmados ni estables. La historia política, muy especial desde fines de los 60 hasta hoy, no podría ser explicada al margen de esa determinación original y su escasa transformación desde entonces (Quijano, 2000). Como señala Marini, “de Argentina a México, el régimen político, una vez estabilizado, no diferiría mucho. El constitucionalismo portaliano chileno de los años treinta no era esencialmente distinto al Estado porfirista mexicano del último cuarto del siglo, y ambos tenían mucho en común con la monarquía brasileña, pese a la base esclavista en que ésta se apoyaba. El mayor o menor desarrollo económico favorecería, aquí y allí, cierta diversificación social e introduciría grados variables de flexibilización en la vida política, sin poner en jaque su carácter oligárquico” (Marini, pág. 4).

La constitución de los nuevos estados condujo a gran parte de los gobernantes a reflexionar acerca de las cuestiones y problemas que afectaban a las sociedades de la época. Así, los principales representantes de la aristocracia criolla comenzaron a elaborar sus análisis acerca

de la sociedad “civilizada” frente al problema del indio, la cuestión racial, la construcción nacional luego de la autonomía política –aún no económica- respecto de los centros imperiales y el advenimiento del capitalismo industrial entre otras problemáticas de la época. Se trataba de intelectuales directamente asociados a la conducción política. Intelectuales como Andrés Bello tanto en Chile como en Venezuela, José Ingenieros, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi en Argentina, el Barón de Río Branco en Brasil, José Vasconcelos en México, Raimundo Nina Rodríguez en Venezuela, José Victorino Lastarria en Chile, José Enrique Rodó en Uruguay, entre otros, se erigieron como pensadores y hacedores de la política latinoamericana en cada uno de los rincones del continente.

El auge del positivismo sirvió para reforzar entre las elites una de las corrientes con mayor desarrollo en las ciencias sociales de la época: el racialismo, surgido de la mano de una concepción peyorativa de lo hispanoamericano y una apreciación desmesurada de las bondades de la inmigración europea. Como señala Altamirano (2004), esta corriente fue un rasgo sobresaliente del pensamiento social latinoamericano que no era sino un eco del racismo de pretensiones científicas que circulaba en el discurso de la antropología y de la sociología europeas. En el caso de América Latina, la perspectiva eurocéntrica, asociada a un evolucionismo unilineal y unidireccional se amalgamó contradictoriamente con una realidad plagada de conflictos cuya imagen en el espejo, como la madrastra de Blanca Nieves, se trata de borrar o eludir simplemente negándola, o entendiéndola sólo como distorsión, “imposible de ser usada salvo para el error” (Quijano, 2000). Los dogmas liberales del progreso, desarrollo, y el binomio atraso-modernización, fueron incorporados como premisas en una lectura que –en consecuencia- hacía pocas concesiones a la especificidad de la realidad estudiada (Lander, 1997), como bien señala Quijano, “de esta manera seguimos siendo lo que no somos. Y como resultado no podemos nunca identificar nuestros verdaderos problemas, mucho menos resolverlos, a no ser de una manera parcial y distorsionada” (2000).

A partir de la creación de los centros universitarios a principios del siglo XX, surge la formación de los primeros profesionales en ciencias sociales asociados principalmente al derecho y la filosofía. Como resultado, surge una nueva instancia de autoridad cultural, cuya base no radica en las fuentes de reputación intelectual que eran características de la elite ilustrada de fines del siglo XIX sino en el cultivo de un saber docto, definido académicamente y practicado según el modelo “desinteresado” de la investigación científica (Altamirano, 2004).

La primera guerra mundial y la posterior crisis económica internacional se tradujeron en cambios en todos los planos del orden social en América Latina. Paralelamente, se había comenzado a esbozar la idea de “región” producto del aumento de las relaciones

comerciales y políticas entre los países latinoamericanos. Hasta este momento, la idea de América Latina como un todo (ya independizada de España y Portugal) y ya tampoco asemejable a la América del Norte (ni a Canadá -aun parte del imperio- ni a los nuevos Estados Unidos) sólo se había esbozado en Europa y había quedado completamente definida desde los Estados Unidos a través de la Doctrina Monroe. Así, los intelectuales latinoamericanos tratarán de establecer sobre bases firmes una tradición original e independiente en la teorización de la región. América Latina comienza a pensarse desde sí misma, en una búsqueda por hallar soluciones latinoamericanas a los problemas latinoamericanos. Este cambio se evidencia primero en el caso del derecho internacional, donde ante conflictos que afectan a la región ya no se busca la ayuda externa o se permite la intromisión indiscriminada de los Estados Unidos sino que se piensan soluciones desde la región misma y en base al interés particular de ésta. Claros ejemplos de ello se desprenden de la Doctrina Calvo de fines del 1800 y la posterior Doctrina Drago de 1902 que proclamaban la igualdad internacional de los Estados y la oposición al cobro compulsivo de deudas públicas, de cualquier país suramericano, mediante la intervención armada del Estado acreedor.

Los claustros académicos estuvieron siempre ligados a la acción política y casi en ningún lugar cundió la torre de marfil como experiencia encuadradora. Casi como marca de origen, y con una visión del todo por hacer, no se le teme a la asociación entre producción de conocimiento y compromiso político. No se establecen deslindes absolutos entre los juicios de hecho y los juicios de valor propios de las ciencias positivistas. El enclaustramiento, la falta de una relación directa entre intelectuales y política o las barreras entre los compartimientos disciplinarios, característicos en especial de las ciencias sociales norteamericanas, se vuelven extremadamente porosas. Sobre la indagación empírica y la cuantificación, prima el esfuerzo interpretativo global que busca dar cuenta de los procesos históricos, políticos, sociales y culturales, como realidad que no podía ser descompuesta en compartimientos estancos. Sin embargo, con la institucionalización de las ciencias sociales, en particular de la sociología (independizada del derecho y la filosofía) y la economía, la separación entre académicos y políticos comienza a cobrar mayor distancia. En este sentido, el primer paso lo da Brasil, con la creación de la Escuela Libre de Sociología y Política de Sao Paulo, en 1933. Para 1950, ese proceso se extiende a la mayoría de los países de la región. Pero a partir de la descolonización en África y Asia las ciencias sociales latinoamericanas interrumpen su diálogo exclusivo con las de los países centrales y entablan lazos con producción de los otros continentes del mundo periférico (Lander, 1997). Al promediar el siglo XX, influidos por el “clima existencialista”, los intelectuales cuestionaban su propio lugar como intelectuales de clase. Es que el lugar del intelectual frente a la política iba cambiando. Al sociólogo «profesional» que, se popularizó en los años 50, diestro en el manejo de la razón técnica, siguió el intelectual «revolucionario» de los 60, réplica moderna

del «gran intelectual» tradicional, preocupado sólo por los grandes problemas y las grandes teorías (Portantiero, 1989).

A partir de la década del cincuenta y hasta los setenta, bajo la insignia del desarrollo, se desenvuelve el que podría ser el intento más original de abordar colectivamente, desde perspectivas propias el diagnóstico y las propuestas de futuros posibles para las sociedades latinoamericanas. Bajo la insignia del desarrollo y los conceptos de centro-periferia - desarrollados en la obra central de de Prebisch y Sunkel y Paz; de sub-imperialismo de Ruy Mauro Marini; de colonialismo interno de Pablo González Casanova; el enfoque de la dependencia de Cardoso y Faletto (1969)- se sentaron las bases de una sociología económica y una economía política, paradigma fundacional de lo que habrían de ser las ciencias sociales latinoamericanas por excelencia. Las versiones latinoamericanas de la sociología del desarrollo y de la economía del desarrollo, fundadas en el estructuralismo, la sociología crítica y la teoría de la dependencia, fueron expresiones de la capacidad de los científicos de la región de confrontar aquellas ideas dominantes en el debate internacional, desnudando premisas y limitaciones. América Latina cuestionó el saber convencional, descubrió los dogmas establecidos y los transformó reinventándolos (Nahón, Enríquez, & Schorr, 2006). Y es así como surge de este diagnóstico de consubstanciación entre intereses externos y elites dominantes, el espacio para el intelectual comprometido con la recuperación del espacio para lo interno y por ende con el cambio.

Si en los tiempos de existencialistas el modelo a seguir era el del intelectual comprometido con los condenados de la tierra, con la polarización política y la aparición de la violencia como elemento cada vez más central de la cultura política latinoamericana, este modelo iba siendo reemplazado por el del intelectual militante encarnado por Frantz Fanon. Si antes el intelectual se comprometía en tanto tal, gradualmente parecía que este compromiso solo podía materializarse abandonando la posición de intelectual y cambiando en muchos casos la pluma, y la torre de marfil por el barro y el fusil. En un sentido, el campo intelectual era casi monopolio de la izquierda –se ha dicho que “intelectual de derecha” era en esos años un oxímoron ((Neiburg & Plotkin, 2004). Los intelectuales y los militantes que parecían ir por caminos paralelos o al menos asintóticos terminaron convergiendo en un proceso que fue destructor desde lo político y desde lo intelectual académico. Frente a la violación sistemática de los derechos humanos, la democracia emergió como un nuevo horizonte de reflexión y de posibilidades para el futuro de América Latina. Hacía falta emprender un largo y minucioso proceso de esclarecimiento conceptual. La figura de Lechner fue siempre un aporte desafiante e imaginativo al rico debate que se abrió por esos años.

Un aspecto central de los cambios ocurridos en las ciencias sociales en este período han sido las transformaciones institucionales. Las interrupciones en la vida democrática y la sucesión de gobiernos de duración variable y a veces incierta afectaban a las instituciones y la sociedad en su conjunto. La inauguración de un gobierno militar era acompañada por la intervención de las universidades, lo cual implicaba la interrupción de sus actividades

académicas y, por ende, de la investigación que en ellas se llevaba a cabo (Uña, Cogliandro, & Labaqui, 2004). Las ciencias sociales fueron prácticamente expulsadas de las universidades, con graves consecuencias que impactaron directamente en la relación entre académicos y políticos. Se produjo una severa ruptura entre la historia anterior y las nuevas generaciones de estudiantes. Fue así como la inestabilidad trajo aparejada la reducción de los espacios que tradicionalmente se habían dedicado a la investigación, incentivando en los intelectuales la búsqueda de nuevos espacios que les permitieran resistir los avatares de la política nacional. Hubo un desplazamiento hacia los centros privados mientras la investigación se sostenía con financiamiento externo, generando cambios fundamentales en la construcción de conocimiento (Uña, Cogliandro, & Labaqui, 2004). En otros países la expansión violenta de la matrícula estudiantil, el colapso presupuestario y la transformación de los recintos universitarios en arena privilegiada de confrontación política, territorio de reflujo de organizaciones de izquierda derrotadas en otros espacios de la sociedad, condujo a un profundo deterioro de la vida académica. El potencial de la universidad como ámbito para la creación de conocimiento alternativo fue sacrificado en función de un gremialismo y utilitarismo político a corto plazo (Lander, 1997).

EL SABER EXPERTO Y LA PROLIFERACIÓN DE LOS *THINK TANKS*

Con la autocrítica respecto del ideario revolucionario y revalorización de la democracia que marcaron el “clima de ideas” a partir de los 80, la figura del cientista social se fue definiendo en base a la posibilidad de dar respuesta a los procesos de cambio e institucionalización. Si construir la paz y la democracia fueron los objetivos de los tempranos 80, a medida que promediaba la década, la eficiencia y la reforma económica se convirtieron en las palabras claves. Al mismo tiempo, al abrirse las posibilidades de participación en la política pública, se vislumbra más claramente que el estado ideal, *deus et machina*, agente de transformación de la sociedad, cerebro de la planificación global, simplemente no existía, colonizado por los agentes económicos y devorado por su deterioro fiscal y administrativo. Surge la necesidad de saberes específicos (Portantiero, 1989), y comenzaron a proliferar diversos centros de formación pública y privada que proclamaban su “independencia” respecto de las ataduras del pasado.

La implosión de los socialismos reales junto a la oleada neoliberal permitieron la conformación de una nueva relación entre la academia y las políticas públicas. Se produjo durante estos años la proliferación de *think-tanks* y grupos intelectuales que formaron parte de la nueva estrategia de gobierno del neoliberalismo en la promoción de un nuevo vínculo entre los expertos y la política. Así, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha definido a los *think tanks* como "organizaciones dedicadas principalmente a la investigación y la promoción de cualquier asunto relacionado con la política pública. Son el puente entre el conocimiento y el poder en las democracias modernas" (PNUD, 2003).

Estas organizaciones, involucradas de distinta manera en el proceso de formulación de políticas públicas y la gestión pública, no tardaron en mostrar un comportamiento dinámico y reactivo frente a los cambios políticos y sociales de la década del ochenta y principios de los noventa. De esta forma, estas organizaciones comenzaron a cumplir un rol protagónico en el diseño de políticas públicas y en la implementación de nuevos procesos de gestión en la administración pública, supliendo falencias de un Estado con estructuras y procesos atrasados (Uña, Cogliandro, & Labaqui, 2004). Esta participación ha contribuido a la mutación del espacio político latinoamericano otorgándole al saber experto un lugar privilegiado en la confección de programas de gobierno y en la toma de decisiones políticas (Engelman & Zapata, 2002). A diferencia de lo que había sucedido hasta el momento, ya fuera por una necesidad de propiciar una ideología en particular o por nutrirse de un conocimiento experto sobre la misma, los centros de investigación especializados – principalmente privados- adquirieron un rol fundamental en la relación entre académicos y hacedores de política.

Diane Stone (2007) identifica tres etapas en la evolución de los *think tanks* a nivel mundial. La primera generación de *think tanks* surge como respuesta a los problemas sociales y económicos generados por la urbanización, la industrialización y el crecimiento económico. Se establecieron en los países de habla inglesa, predominantemente en los Estados Unidos, dado el alto enclaustramiento de la universidad y su distancia activa de la política pública. En contraste con las figuras de los pensadores latinoamericanos que son reverenciados por su involucramiento en la construcción de las repúblicas, Woodrow Wilson era objeto de menosprecio tanto en el ambiente político de Washington como en su alma mater.² En general, los *think tanks* surgidos en América del Norte y Gran Bretaña lo hicieron como respuesta al crecimiento del Estado y sus necesidades no canalizadas por las universidades.

El período posterior a la Segunda Guerra Mundial trajo consigo un papel más amplio para el Estado en la vida social y económica, lo que provocó una segunda oleada de desarrollo de los *think tanks*. Muchos de los *think tanks* pertenecientes a esta segunda generación fueron pioneros en la aplicación de nuevas técnicas de estadística, modelos económicos y análisis de costo-beneficio. Así, conforme la demanda de los gobiernos por este tipo de análisis se fue expandiendo lo hizo también el número y la variedad de *think tanks*. Los ya existentes institutos centrados en el estudio de las políticas sociales fueron progresivamente superados en número por institutos de política exterior, centros para el estudio de la seguridad, e institutos dedicados a estudios de desarrollo.

A partir de la década de 1980 sobrevino la proliferación de *think tanks*, en parte, en virtud a la maduración misma de estos centros dentro del sistema político anglo-americano. Posiblemente como causa o como consecuencia del aumento de las problemáticas

² Setenta años después, Henry Kissinger relata en *The White House Years*, similares aprensiones de sus colegas de Harvard cuando Nixon lo convoca a formar parte de su gabinete. En América Latina, no podemos imaginarnos ni a Jorge Castañeda, Luis Maira, Alejandro Foxley, Álvaro García Linares o a José Antonio Ocampo como desdeñados desde el ámbito intelectual académico, sino todo lo contrario.

ambientales, se produjo una multiplicación de los institutos de políticas medioambientales. La especialización de los centros fue evolucionando hacia frentes crecientemente especializados como, por ejemplo, políticas para la mujer, ética empresarial, y promoción de la democracia (Stone, 2007).

En América Latina, las reformas económicas las décadas de los 80 y los 90 representaron el período de mayor expansión de estas usinas de conocimiento (Botto, 2007). En este sentido, el cambio significativo en el encuentro entre el mundo del saber y la política involucra una superación de la división entre investigadores y decisores, a partir de “contextos interactivos” donde participan diversos agentes con información parcial y conocimientos locales. Se trata entonces de actores heterogéneos que intervienen en el proceso de producción de conocimiento en el marco de una nueva manera de organización basada en términos flexibles y transdisciplinarios (Engelman & Zapata, 2002). Los *think tanks* se erigen sin lugar a dudas como actores políticos (Mendizábal, 2009). No se los puede pensar como separados de la política o pertenecientes a una comunidad aislada que debe “comunicarse” con la comunidad política y las políticas.

En América Latina los precursores de los hoy llamados *think tanks* se originan en un espacio de contestación política enfocado, primero, en la lucha por la independencia y, segundo, en la construcción de la república. Un ejemplo del primero es la Sociedad Académica de Amantes del Perú (1790); mientras que los periódicos liberales y conservadores de segunda mitad del siglo XIX, fueron los ámbitos de debate intelectual y académico fundamentalmente políticos (Mendizábal, 2009). En el presente, el rasgo primordial que caracteriza a los *think tanks* latinoamericanos tiene que ver con el compromiso inicial y la alta predisposición de los académicos a involucrarse en los problemas públicos y volcar sus conocimientos a la sociedad. En la región es posible identificar distintos tipos de *think tanks* que conviven simultáneamente: centros universitarios tradicionales, orientados sobre todo a la investigación; centros de estudio especializados en consultorías y asesoramiento; oficinas de planificación y evaluación de políticas alojados en el aparato estatal; ONG orientadas a la *advocacy*; centros privados financiados por el sector privado; y, centros focalizados en lograr incidencia en el debate público (Garcé, 2009).

Lo que parece haberse modificado en el curso de la década de los 90 fue, por un lado, la configuración de los actores que protagonizan el proceso de políticas públicas, y por otro lado, la articulación de las relaciones entre estos actores. En este sentido, la aparición en escena de un entramado de fundaciones, consultores, centros de investigación y *think-tanks*, que se vinculan crecientemente con organismos internacionales y agencias gubernamentales, configura un escenario sustancialmente diferente al que se conocía en materia de formulación y ejecución de políticas públicas, durante los años 80 (Lardone, 2007). En este momento se suceden dos fenómenos relacionados entre sí: por un lado, surgen fundaciones y centros universitarios vinculados al mundo empresarial para apoyar y promover la modernización del Estado y las políticas de liberalización; por el otro, se desarrollan las

ONG como respuesta a la retracción del Estado. Paralelamente, en el marco de los procesos de redemocratización y de modernización institucional, comienzan a aparecer también *think tanks* creados a instancias de políticos, fracciones de partidos o partidos políticos (Garcé, 2009).

La nueva configuración de organismos dedicados a incidir en la política pública permitió la conformación de un entramado de académicos orientados a ejercer sus tareas de investigación en vistas de una mayor participación en la toma de decisiones de los países latinoamericanos. Aunque en algunos países más que en otros, los *think tanks* se convirtieron en actores crecientemente relevantes en la vida política. Claros ejemplos de ello han sido FIEL, la Fundación Mediterránea y el CEMA en la Argentina de los 90; el Instituto Libertad y la Fundación Jaime Guzmán en Chile; el Instituto del Pensamiento Liberal en Colombia; la Fundación Liber Seregni y el Instituto Manuel Oribe en Uruguay; entre otros.

La proliferación de estas usinas de conocimiento especializado lleva a cuestionarnos sobre su rol e influencia política. Por un lado, resulta una realidad ineludible el hecho de que a pesar de su amplio crecimiento, los *think tanks* no gozan la mayoría de las veces de acceso político automático. Los intentos por servir de agentes del análisis político para los tomadores de decisiones no equivalen a lograr incidencia sobre la futura legislación o la ejecución de políticas. Por otro lado, es un hecho también que los *think tanks* han insertado problemáticas en el debate político, buscando contribuir a la formulación de políticas en la ampliación y profundización del horizonte de las políticas. Al crear enclaves de conocimiento basados en la autoridad, experiencia y práctica y ofrecerlos al público ya filtrados, desprovistos de las circunstancias ajenas que las ideas recolectan durante el proceso de formulación, pueden servir como lazo entre la política y el público en general. Así, atraen al público que está, o bien ocupado para pensar, o que necesita un atajo entre el mundo pensante y la aplicación práctica de ese pensamiento. Aquéllos que logran obtener el acceso político necesario, actúan como mediadores de los circuitos de *expertise*. Por un lado se constituyen como parte integradora de la elite dominante, mientras que, por otro, influyen en los rumbos de las políticas implementadas (Engelman & Zapata, 2002). Como consecuencia, sirven de engranajes de una maquinaria más amplia de gobernanza constituida por los diversos centros académicos, los decisores e implementadores de políticas, y el público.

En este contexto, una parte creciente de los académicos se consolidan como portador de un «saber técnico» orientado directamente a la elaboración e implementación de las políticas neoliberales en el continente. Esta especialización permitió acortar la brecha existente entre los académicos y la sociedad que había primado desde principios de los 70, cuando los «intelectuales revolucionarios» fueron diezmados u obligados al exilio. El retorno de la democracia no solo reconstruyó el lazo entre el público y la política sino que permitió forjar también un nuevo relacionamiento entre el conocimiento –o un sector de éste- y estos dos sectores. Simultáneamente, la ideología neoliberal que caracterizó a la década del 90 devino

indirectamente en el fortalecimiento y la reconstitución de otras fuerzas sociales e ideológicas contestatarias, opuestas al achicamiento del Estado y la alta dependencia del sector externo. Más allá de las preferencias partidarias o teóricas, la lucha ideológica estimuló el debate académico entre quienes adherían a esas políticas y quienes denunciaban sus efectos devastadores. Este debate permitió el fortalecimiento y consolidación de un cuerpo de académicos involucrados en la vida política y que, desde sus oficinas en diversos *think tanks*, han logrado consolidarse a nivel regional y lograr reconocimiento entre sus pares en otros países del continente y el mundo.

La consolidación del académico como actor relevante dentro de la estructura de la toma de decisiones a nivel político es una tendencia que perdura luego de los 90 y que parece no desaparecer con los años³. Con la llegada de la «nueva izquierda» o gobiernos de corte «populista» a muchos de los países latinoamericanos⁴, los *think tanks* –y sus respectivos representantes académicos- no han perdido el lazo con la toma de decisiones políticas. Ya sea a favor o en contra de la nueva corriente ideológica predominante en la región, los intelectuales no han dejado de orientarse a incidir en el quehacer político de sus países. Sus tareas van desde la elaboración de teorías, el análisis de sucesos, o, la búsqueda de explicaciones científicas a los problemas sociales y políticos; hasta la elaboración de recomendaciones y planes de políticas públicas para los gobiernos, su desempeño como asesores y/o consultores del Estado, o el comienzo de carreras políticas en diversas áreas de la toma de decisiones.

¿INTELECTUALES O EXPERTOS?

Dejando de lado las visiones dicotómicas sobre las relaciones entre intelectuales y expertos, Neiburg y Plotkin (2004) señalan la tradicional diferenciación entre intelectuales y expertos no como extremos de una línea, sino como constituyentes de un espacio de intersección productiva donde la circulación de individuos, ideas, modelos institucionales y formas de intervención en el Estado y la academia producen conocimiento sobre la sociedad. La idea de intelectual sirve para designar a aquellos individuos que reclaman como fundamento de legitimidad para sus intervenciones públicas una forma de pensamiento crítico, independiente de los poderes, y sustentada en el uso de la razón. El intelectual se caracteriza por tener un tipo de formación general, que puede o no tener a la universidad como ámbito principal de acción. El término experto, en cambio, es más reciente y se utiliza para referirse a los técnicos, los especialistas que trabajan en y para el Estado, las ONG y los organismos

³ Hacia 2008 se contaban 538 *think tanks* en América Latina, que representaban el 9.84% del total mundial. Dentro de este grupo, Argentina ocupa el quinto lugar en el ranking mundial de países con más *think tanks* (121), luego de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia (*THE GLOBAL "GO-TO THINK TANKS"*; 2009)

⁴ Léase Néstor Kirchner y, posteriormente, Cristina Fernández en Argentina; Hugo Chávez en Venezuela; Rafael Correa en Ecuador; Evo Morales en Bolivia; Luiz Inacio Lula Da Silva en Brasil; Daniel Ortega en Nicaragua; y el Frente Amplio en Uruguay, entre otros ejemplos.

internacionales y que poseen especialización y entrenamiento académico (Neiburg & Plotkin, 2004).

Del mismo modo, Brunner (1996) hace una distinción entre el conocimiento como representación y el conocimiento como destreza. El primero, se refiere al conocimiento como idea o bien simbólico, donde se busca comunicarse y obtener el reconocimiento de los demás productores al interior de las respectivas comunidades disciplinarias. El segundo, en cambio, permite a su poseedor un actuar informado, una práctica específica. Es practicado y su utilización se halla determinada por una estructura de oportunidades que está siempre más próxima al polo de la acción –y de las decisiones- que al polo de la producción. En este sentido, en los últimos tiempos años los científicos sociales están viendo cambiar rápidamente su rol y su identidad profesional. En un primer paso, se fueron alejando de la figura del intelectual para acercarse a la del experto hasta llegar a una visión actual caracterizada por la alta demanda y diversificación del conocimiento que poseen y que requiere tanto una redefinición de su rol como nuevas estrategias de reposicionamiento frente a la política pública. Como señala Botto (2007), la distinción entre especialistas y decisores aparece ambigua tanto a nivel de la conceptualización como de comportamientos y, muchas veces, ambos roles aparecen superpuestos en una misma persona.

El nuevo rol de los investigadores sociales es caracterizado en base a lo que Reich (1993) llama servicios simbólico-analíticos. En una sociedad en constante cambio, víctima de los avances de la globalización y los mercados, los bienes fundamentales de una nación están constituidos por la capacidad y destreza de sus ciudadanos. En este nuevo contexto los investigadores adquieren un rol fundamental. Los servicios simbólico-analíticos se pueden prestar universalmente y por eso tienen que competir con los prestadores extranjeros, pero no se ofrecen al comercio mundial como algo estandarizado. Lo que se comercia son símbolos, datos, palabras, representaciones visuales y orales. Así, los analistas simbólico-analíticos hacen de intermediarios, identifican y resuelven problemas valiéndose de símbolos. Simplifican la realidad con imágenes abstractas las cuales pueden ser reordenadas y alteradas, y resulta factible experimentar con ellas, comunicarlas a otros especialistas y finalmente convertirlas nuevamente en una realidad. Para ello utilizan instrumentos de análisis obtenidos a través de la experiencia. La educación formal de un analista simbólico requiere el perfeccionamiento en cuatro habilidades básicas: la capacidad de abstracción, gracias a la cual la realidad debe ser simplificada de modo que pueda ser comprendida y manejada de diferentes maneras; el pensamiento sistémico, que le permita apreciar el conjunto y comprender los procesos mediante los cuales los componentes de la realidad se relacionan; la experimentación y aprendizaje constante; y la capacidad de colaborar en trabajos en equipo y el intercambio de ideas (Reich, 1993).

El rol del investigador como analista simbólico se erige como punto de quiebre entre las dicotomías que separan al intelectual del experto para dar lugar a una nueva forma de construcción del conocimiento social apoyada tanto en la capacitación académica sino

también práctica de los científicos sociales. Es en esta labor práctica donde surge la pregunta acerca de la incidencia del conocimiento en la política pública. Durante muchos años se ha discutido si la investigación en ciencias sociales debía limitarse a los claustros universitarios y a producir intelectuales –en el sentido descrito anteriormente–, o si, en cambio, las investigaciones debían orientarse a la elaboración de políticas y la facilitación de conocimiento para la toma de decisiones. Frente a una labor cuyas fronteras aparecen como cada vez más borrosas, el trabajo del investigador como analista-simbólico busca concentrar ambas tareas en el afán por proveer el conocimiento necesario no solo para la discusión teórica sino también para su aplicación práctica.

Hoy en día existe un paralelismo lógico entre la construcción de teoría y la toma de decisiones que pueden ser identificadas en cuatro pasos. Cuando los científicos realizan observaciones, los políticos plantean problemas. Donde los científicos proponen explicaciones, los políticos proponen medidas correctivas. Donde los científicos señalan consecuencias empíricas y hacen predicciones a partir de sus modelos, los políticos encuentran posibles implicaciones políticas a sus propuestas. Cuando los científicos descartan explicaciones cuando las predicciones de las mismas no se corresponden con los hechos, los políticos descartan opciones o reformas que no son factibles o viables. Cuando los científicos tratan de explicar el mundo real, los políticos intentan crear mundos posibles. Ambas profesiones no sólo demandan agudeza y ponen a prueba a la imaginación, sino también convocan a la capacidad de detectar la importación y resolver las controversias (Hernes, 2008).

En el proceso de incorporación de lo social a la toma de decisiones se requiere de un conocimiento práctico y de utilidad inmediata además de la voluntad de usar ese conocimiento para transformarlo en una política pública. Esta voluntad requiere de un proceso de toma de decisiones que involucra información por la cual decide. Información que es generada por universidades, centros de investigación especializada, pensadores, etc., que atienden demandas de los ciudadanos, de las organizaciones no gubernamentales o del tercer sector, de las empresas e inclusive de los medios de comunicación. Las políticas públicas implican un proceso de toma de decisiones: decidir que existe un problema, decidir que ese problema requiere de una solución, decidir la mejor manera de resolver el problema y decidir legislar sobre ese problema. Para ello, los hacedores de políticas públicas deben contar con información completa, y es en esta instancia en la que el rol del investigador se vuelve relevante, la posibilidad de influir en los grupos encargados de definir las políticas públicas y contribuir en su elaboración (Nájera Meixueiro, 2003).

De la mano de la investigación y el uso del conocimiento orientado a la toma de decisiones han ido surgiendo entonces nuevos espacios para el debate académico e intelectual orientados fundamentalmente a objetivos de política pública. Los diferentes tipos de análisis políticos de los *think tanks* van de ser, por un lado, altamente científicos, académicos, o tecnocráticos en estilo, a ser abiertamente ideológicos, partidistas, e impulsados por su

advocacy por otro lado, presentando como resultado normas de calidad muy diferentes. La interacción entre la aplicación de conocimientos a los problemas de la política se complementa con prácticas estratégicas para desarrollar lazos de asesoramiento a los gobiernos, la industria o el público, actuando como “articuladores del análisis de políticas. En consecuencia, el análisis de políticas de los *think tanks* no se erige simplemente como un ejercicio intelectual que se manifiesta a través de comentarios de expertos o de documentos de política, sino que se encuentra también orientado por la acción, independientemente de la política empresarial, el desarrollo institucional y la profesionalidad de los *think tanks* en la lucha de ideas.

CONCLUSIÓN

Durante muchos años, la tarea del investigador social se dirimía entre el espíritu misionero como portavoz de los oprimidos o los “condenados de la tierra” y la construcción de ideas trascendentes, sólo posibles de ser entendidas en las aulas universitarias. Por diversas razones que comprenden desde un alejamiento de las ciencias sociales de la realidad política hasta la persecución de los académicos “portavoces de los marginados”, la separación entre los intelectuales y la política pública fue una realidad ineludible.

Con el avance de la pacificación y la democratización esa separación se fue reduciendo, acercando a la política pública con los académicos y sirviendo estos últimos como lazo entre la política pública y el público. Hoy, frente a la disyuntiva acerca del rol que un académico debería jugar en la vida política de un país, los intelectuales parecieran haber superado la barrera que los mantenía alejados del involucramiento en cuestiones del Estado. Esto no debe conducir a la indulgencia en relación a la capacidad de incidencia, sino a reconocer que tras grandes teorías explicativas normalmente cohabita el voluntarismo y el escepticismo.

En este nuevo contexto, el desafío se presenta al intentar definir los límites del propio accionar, en los nuevos dilemas y riesgos que se abren. A la vez que se han relegado las grandes ideas redentoras tanto para “pensar como repensar América Latina”, el riesgo de la creciente especialización es el surgimiento del conocimiento endógeno, a partir de la cual el rol esencial de los académicos consiste en echar luz sobre las decisiones en manos de tomadores con respecto a las opciones posibles. Dejando de lado las visiones en clave binaria entre intelectuales y expertos como extremos de una línea podemos comprender a ambos como partes constituyentes de un espacio de intersección en el cual se producen conocimiento sobre la sociedad (Neiburg & Plotkin, 2004).

Al mismo tiempo, cuando un sistema político se estabiliza y a medida que se van diferenciando los intereses de los actores, el rango de las opciones y alternativas para los actores sociales se amplía y, si bien las posibilidades de grandes cambios se evaporan, los

cambios en el margen y en relación a temas específicos son infinitamente mayores, como lo demuestran las crecientes diferencias políticas y económicas que impera en la región.

Finalmente, el surgimiento del conocimiento experto permite un cierto encuentro “con nosotros mismos”, con la realidad que nos pertenece. Es una constante en la historia de las ciencias sociales la emergencia de reflexiones que creen que el conocimiento comienza con sus propuestas. Por ello una relación más íntima con la política pública, sus realidades (y no sólo sus ambiciones), sus instrumentos y (no sólo con la sociedad imaginada) trae consigo más oportunidades de real incidencia y también, márgenes ampliados para fortalecer lo *público* como ámbito autónomo y crítico, tanto de la esfera estatal como del mundo privado, en el sentido que marcaba Lechner.

Pero para ello debemos comprender desde dentro la lógica de lo político. La política es siempre resultado de la negociación, negociación que resulta difícil de comprender a los académicos en afán racional y ordenador. El político debe componer, acordar, negociar. En el territorio de la política nunca nada es demasiado claro; todo es penumbroso y lleno de posibilidades múltiples y contradictorias y nunca es lineal ni unidireccional. Así pues adaptar la mentalidad racionalista y perfeccionista a un mundo tan esencialmente desordenado, es un proceso difícil y para muchos exasperante.

Bajo regimenes autoritarios, la academia podía cumplir con facilidad inherente el rol de *outsiders* críticos, resistentes morales, embanderados de los excluidos y reprimidos. Y en este presente menos lineal, más que una crisis de paradigma enfrentamos una crisis de identidad, donde debemos aprender a contemplar formas de encauzar los saberes más lejos de la tensión entre política institucional concentrada en el sistema de partidos y la política en las calles.

El hecho de que los metarrelatos del siglo XX con visiones universales del camino al futuro promisorio (ya sea en versión revolucionaria o en versión neoliberal) hayan entrado en crisis, deja espacios para la confluencia de razón y pasión, para la lenta y dura construcción de una nueva voluntad colectiva que se refleja menos mesiánica y más heterogénea, más segmentada y más híbrida. Porque el reino de la libertad aun está muy lejos en América Latina, nuestra extrema desigualdad deviene en un punto de partida insoslayable. En última instancia la calidad de nuestras sociedades debe juzgarse por la forma en que tratamos a los menos afortunados. Como nos recordara sin ira ni melancolía Nora Rabotnikof en el aniversario de “los condenados de la tierra”, ellos “siguen ahí.” (Rabotnikof, 2002). Y como meros labradores contribuimos a formar el pensamiento de la generación que nos sucede.

Bibliografía

- Altamirano, C. (2004). Entre el naturalismo y la psicología: el comienzo de la "ciencia social" en la Argentina. En F. Neiburg, & M. Plotkin, *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina* (págs. 31-66). Buenos Aires: Paidós.
- Botto, M. (2007). La incidencia del conocimiento en la formulación de la política comercial. En M. B. (Comp.), *Saber y política en América Latina. El uso del conocimiento en las negociaciones comerciales internacionales* (págs. 25 - 48). Buenos Aires: Prometeo .
- Brunner, J. J. (1996). Investigación social y decisiones políticas: El mercado del conocimiento. *Nueva Sociedad*(146), 108 - 121.
- Engelman, A., & Zapata, L. (2002). *Los analistas simbólicos: el poder de los saberes expertos*. Buenos Aires.
- Garcé, A. (2009). Estudio marco. En E. Mendizábal, & K. Sample, *Dime a quien escuchas... Think tanks y partidos políticos en América Latina* (págs. 21-56). Lima: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; Overseas Development Institute.
- Hernes, G. (2008). The Interface Between Social Research and Policy Making. *European Sociological Review*, 24(2), 257-265.
- Lander, E. (1997). Las ciencias sociales en el atolladero. América Latina en tiempos posmodernos. *Nueva Sociedad*(150), 19-23.
- Lardone, M. (2007). *Construyendo consenso. La modernización del Estado y los mecanismos de articulación entre Bancos Multilaterales de Desarrollo y Think Tanks en Argentina*. Universidad de Buenos Aires, V Jornadas Internacionales de Estado y Sociedad, Buenos Aires.
- Lechner, N. (1997). Intelectuales y política. En L. Baca Olamendi, & I. Cisneros, *Los Intelectuales y los dilemas políticos del Siglo XX* (págs. 33 - 35). México: FLACSO/México; Triana Editores.
- Marini, R. M. *La sociología latinoamericana: origen y perspectivas*. Archivo de Ruy Mauro Marini, con la anotación "Ponencia Sociología, 070894".
- Mendizábal, E. (2009). Introducción. En E. Mendizábal, & K. Sample, *Dime a quién escuchas... Think tanks y partidos políticos en América Latina* (págs. 1-14). Lima: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; Overseas Development Institute.
- Mendizábal, E., & Sample, K. (2009). Epílogo. En E. Mendizábal, & K. Sample, *Dime a quien escuchas... Think tanks y partidos políticos en América Latina* (págs. 238-242). Lima:

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; Overseas Development Institute.

Nájera Meixueiro, G. (2003). *La investigación social, la toma de decisiones y las políticas públicas: La experiencia de la cámara de diputados*. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; Cámara de diputados de México.

Neiburg, F., & Plotkin, M. (2004). Intelectuales y expertos. En F. Neiburg, & M. Plotkin, *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina* (págs. 15 - 27). Buenos Aires: Paidós.

Portantiero, J. C. (1989). *Perspectivas de las Ciencias Sociales en América Latina*. Barcelona: Universidad de Buenos Aires.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. L. (Comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Rabotnikof, N. (2002 “Recordando sin ira: Memoria y melancolía en la relectura de Fanon”, *Revista Internacional de Filosofía Política*, Numero 20

Rabotnikof, N. (2008). Lo público hoy: lugares, lógicas y expectativas. *Iconos. Revista de ciencias sociales*, 37-48.

Reich, R. (1993). *El trabajo de las naciones*. Buenos Aires: Vergara.

Stone, D. (2007). Public Policy Analysis and Think Tanks. En F. Fischer, G. Miller, & M. Sidney (Edits.), *Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods* (págs. 149-157). Boca Raton: CRC Press.

UNDP. (2003). *Thinking the Unthinkable*. Bratislava: UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States.

Uña, G., Cogliandro, G., & Labaqui, J. (2004). *Políticas públicas y toma de decisiones: Los think tanks en Argentina*. Buenos Aires: Fundación Konrad Adenauer.

Wagner, P. (2007). Public Policy, Social Science, and the State: An Historical Perspective. En F. Fischer, G. Miller, & M. Sidney (Edits.), *Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods* (págs. 149-157). Boca Raton: CRC Press.

